



FRANCISCO MUÑOZ

# De rateros a ESTAFADORES MILLONARIOS

La Fiscalía y la PDI de Talca detuvieron a mediados de julio a 12 personas como sospechosas de integrar una banda que utilizaba un sofisticado método tecnológico para, a través del celular, secar las cuentas y tarjetas de clientes bancarios. Se estima que podría haber hasta 17 mil víctimas. Con el dinero que lograron robar se dieron la gran vida, repleta de lujos gracias a un delito que aprendieron paradójicamente mientras compartieron en el cárcel. **POR LEO RIQUELME**

**“¡Alo, buenas tardes, ¿con don Franklin V? (...) Muy buenas tardes, don Franklin, primero que nada saludarle. Mi nombre es Gabriel González, supervisor de tarjeta Líder BCI. Le estoy preguntando del BCI, don Franklin, del área de Prevención de Fraudes, para verificar si está efectuando usted dos compras que fueron ingresadas al sistema el día de hoy con cargo a su tarjeta de crédito por el valor de 392.300 pesos y por el valor de 222.500 pesos”.**

La persona que llama por teléfono suena calmada, amable y habla correctamente, como lo haría el ejecutivo de un banco. Si bien no se escucha lo que le responde su interlocutor, da la impresión de que se inquieta ante la notificación.

“Estas compras se están efectuando con cargo a su tarjeta de crédito”, le insiste, para luego indicarle con exactitud cuáles son sus dos nombres y apellidos y su RUN. Antes de pedirle algunos antecedentes adicionales, le dice: “Mantenga la calma, nosotros estamos para ayudarle, don Franklin”.

Franklin V. es una de las 17 mil personas que fueron contactadas en los últimos cuatro años por esta banda que aprendió a estafar mientras sus miembros estaban en el cárcel de Talca. Su líder, hasta entonces, era un ladrón que purgaba penas que incluían hasta un robo de balón de gas en una casa sin moradores.

“El apenas sabe leer y escribir —lo describe el fiscal Francisco Soto—. Pero se trata de un tipo brillante.”

A fines del año pasado, la Fiscalía y la Brigada Antinarcofónica y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI de Talca realizaban una investigación por un caso de drogas cuando detectaron a tres sospechosos.

El fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad y Análisis Criminal (UNAAC) de Talca, Francisco Soto, recuerda que se trataba de una casa “pequeña”, de unas 500 gramos de sustancias ilegales, pero en la indagatoria junto a los detectives se dieron cuenta de que entre los implicados había alguien que no cuajaba con el perfil típico de un narcotraficante, pese a que inicialmente creían que se trataba de un narcotraficante.

Las escuchas telefónicas autorizadas para el caso revelaban que en sus llamadas solía simular ser otra persona y en una ocasión hasta fingió la voz de una mujer.

“Este sujeto era Oscar Muñoz”, dice el fiscal. Sus antecedentes indicaban que era un hombre que acababa de cumplir 50 años y que tenía una serie de pasos por centros penales entre 2010 y 2017, especialmente por robo en lugares no habitados. Aunque registraba domicilio en el Barrio Norte de Talca, un sector populoso de la capital maullina, en realidad estaba viviendo en un condominio nuevo en Las Rastras, uno de los sitios acomodados de la ciudad.

El jefe de la Brianco, subprefecto Mauricio Fuentes, cuenta que una revisión más exhaustiva de sus papeles arrojó que Muñoz figuraba como gerente general de una empresa local, de la cual era accionista mayoritaria. Además, estaba dedicado a la producción agrícola y le vendía trigo a un importante molino de la zona.

“Estas cosas no se concilian con el historial de un señor que

hasta hace tres años estaba preso en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Talca”, agrega el fiscal.

Los antecedentes llevaron a los investigadores a hacerle un seguimiento, con el que descubrieron que Muñoz frecuentaba a diario una vivienda situada también en el sector oriente de la comuna, en el barrio Valles del Country, donde permanecía seguramente entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde.

“En esa casa se juntaba con dos sujetos, que luego se identificaron como Cristian Jara y Luis López, que tienen el mismo historial: tanto estuvieron presos en el CCP de Talca —precisa el fiscal—. También había un vehículo estacionado siempre ahí y que estaba asociado a otro sujeto llamado Waldo Llantén.”

Una rápida revisión en Google arroja que este último protagonizó robos a cajeros automáticos en Curicó entre 2010 y 2011 y huyó con una caja fuerte desde un servitorio en 2013. En sus pasos por prisión fue compañero de celda de Muñoz.

El subprefecto Fuentes recuerda que en sus primeras estafas los reos apuntaban a conseguir que las personas que les contestaban las llamadas, a punta de engaños, inventos de supuestos premios y promociones de cass comerciales, terminaran recargándose tarjetas telefónicas para seguir en contacto con el mundo exterior. Más tarde, sin embargo, los delincuentes dieron un paso más allá y firmaban a sus víctimas con supuestos accidentes de familiares para conseguir que les transfirieran dinero a las cuentas vistas de parientes o amistades.

En esa época, que va al menos desde 2015 a 2017, es cuando se conocieron entre ellos Oscar Muñoz, Waldo Llantén, Cristian Jara y Luis López, quienes purgaban penas como rateros en el penal talquino. Las parejas de estos últimos, Nicol Sepúlveda y Cindy Rojas, eran además “mecheras”, es decir, se dedicaban a robar en tiendas y supermercados, cuenta el fiscal Soto.

“Eran ladrones de poca importancia, por decirlo de alguna manera. Ellos comenzaron con las estafas desde adentro, según dice Oscar... en la cárcel es común que esto suceda.”

Cuando Oscar, Waldo, Cristian y Luis empezaron a cumplir sus sentencias profundizaron ahora en libertad el oficio que habían aprendido tras las rejas. Así, sin despertar sospechas, operaron por al menos cuatro años, hasta que Oscar Muñoz se vio implicado en la causa por drogas.

El fiscal y el subprefecto cuentan que, intrigados ante lo que sucedía, en mayo consiguieron una orden del tribunal para instalar micrófonos espías en la casa que este grupo frecuentaba en Valle del Country. La operación se hizo en la noche, cuando estaba sin ocupantes, y lo que más les llamó la atención fue una caja de cartón llena de tiras de papeles escritos a mano que estaba sobre un mesón. Como no querían dejar rastros que alertaran a los sospechosos, los detectives sólo le sacaron fotografías a 70 y dejaron la caja tal como la encontraron.

Más tarde, los policías descubrieron que en esas 70 fotos estaban los nombres de 70 personas, casi todas adultas mayores, que habían sufrido la pérdida de dinero desde sus cuentas bancarias.

“Ya don Julio, deme un minuto. En este caso, la información no me la entrega a mí, la debe ingresar en el teclado dentro de su teléfono”, se oye decir a alguien en una conversación telefónica grabada con un cliente bancario.

Quien hace la llamada, de acuerdo a la investigación, sería Oscar Muñoz.

“Esta información es personal, el sistema lo requiere. Usted

ingresa al teclado de su teléfono y en forma de silencio ingresa el código de su tarjeta comenzada en 5298, así el sistema lo reconoce y yo bloqueo inmediatamente su tarjeta”, le dice a Julio haciéndose pasar por un ejecutivo que lo está alertando de un hackeo a sus cuentas y que le ofrece la oportunidad de detener el pirateo bloqueándole la cuenta.

“Ya, perfecto, ingrese al teclado de su teléfono. ¿Sabe ingresar al teclado numérico de su teléfono? (...) Bien, ahora en forma de silencio usted va a ingresar (su clave) (...) Si no quiere llevar a cabo el bloqueo, don Julio, las compras se van a liberar”, le advierte Oscar Muñoz.

El fiscal Soto admite que le intriga que los supuestos ejecutivos no pidieran las claves, como suelen hacerlo los timadores tradicionales. La investigación y el ingreso a la casa de Valle del Country lo encaminó hacia la respuesta: los sospechosos tenían un aparato conocido como DTMF, que corresponde a una sigla en inglés de lo que en español se traduciría como “Multifrecuencia de doble tono”.

El DTMF luce como una armónica pequeña con una pantalla azul y consiste en un lector que lleva a números los sonidos que se digitan en el teclado táctil de los celulares. Esta semana, por ejemplo, en el sitio de venta por internet Aliexpress este dispositivo se ofrecía a 12.945 pesos chilenos, sin cobro de envío, y con este la banda hacía más creíble a díadas de la víctima que se trataba de un ejecutivo que estaba tratando de evitar un fraude.

Para seleccionar a su blanco, además, los delincuentes utilizaban una base de datos digitalizada de clientes bancarios comprada legalmente en el mercado. En ella priorizaban los números de RUN bajos, lo que era sinónimo de tratarse de adultos mayores, que son supuestamente personas más incautas y temerosas a ser víctimas de este tipo de timos que algunos joven, y que a la vez suelen ser más ignorantes en el manejo de la tecnología. Pero una vez hecho ese primer filtro, venía un segundo proceso: la data era entregada a alguien que revisaba que fueran individuos que tuvieran acreencias en los bancos.

—Ellos mantenían contacto con una persona que tenía acceso a información privilegiada de las instituciones financieras —cuenta el fiscal—. A través de una escuchas telefónica supimos que se conectaba a una VPN de un sistema bancario y desde allí les verificaba la información que ellos mantenían, indicándoles en qué banco las posibles víctimas mantenían productos financieros y por qué monto.

Esa persona aún no ha sido identificada, aunque la indagatoria y las semanas de escuchas sí llevaron a los investigadores a resolver el enigma de los papillitos.

De acuerdo a la carpeta investigativa, los estafadores trabajaban en duplas. Uno era el encargado de efectuar la llamada telefónica, la cual hacía basándose en un papel que tenía transmitida a mano la información relevante que serviría para hacer creer a su interlocutor de que lo estaban tratando de proteger de un engaño. A continuación, una vez que el cliente tecleaba su clave en su celular y aparecía en el visor del DTMF, el papel era cortado y entregado a un compañero, quien tenía en su poder un “Smart point”, que es el nombre técnico de las máquinas con que se hacen las transacciones en las tiendas cuando se paga con tarjetas. Las pesquisas indican que esta era la persona encargada de gestar o traspasar todo el dinero que tuviera la víctima a cuentas de otros testaferros.

La investigación registra hasta ahora que desde 2020 hasta la fecha había 17 mil nombres anotados en estas hojas de cuadernos recordadas, de una base de datos formal que llegaba a los 63 mil clientes bancarios de todo el país. Según concuerdan el fiscal Soto y el subprefecto Fuentes, todos ellos serían víctimas de estafa, a pesar de que hasta ahora han identificado apenas 22 denuncias formales. El bajo número, creen ambos, se debe a que sus instituciones bancarias les devolvieron internamente el dinero, por lo que evitaron dar cuenta del hecho ante la policía.

Son pasadas las 11 de la mañana del viernes 26 de julio y el fiscal Francisco Soto se disculpa por ingresar algo retrasado a la entrevista convenida a través de Zoom. Explica que viene saliendo de la Corte de Apelaciones de Talca, donde le correspondió alegar la solicitud de libertad que hicieron varios de los 12 detenidos una semana antes por esta causa.

En dicha audiencia de formalización, les imputó a Cristian Jara, Luis López, Oscar Muñoz, Nicol Sepúlveda, Cindy Rojas, Waldo Llantén, Ángela Jaque, Marta Canales, Priscila Calderón, Vicente Muñoz, Felipe Muñoz y Claudio Gómez formar parte de una asociación delictual que “actúa organizada”, de manera sistemática y permanente en el tiempo” para cometer el delito de uso no autorizado de tarjetas de pago.

El grupo, dice el fiscal, trabajaba en seis casas habitadas como calls centers para defraudar gente. Sus miembros llegaban a ellas de lunes a viernes las nueve de la mañana y se iban a las cinco de la tarde, horario que coincide con la jornada que, efectivamente, tienen quienes fungen como ejecutivos bancarios reales.

Dentro de los detenidos hay un contador, quien, según la investigación, concretó una trama de empresas ficticias ideada por Muñoz para blanquear el dinero recaudado, que sería multimillonario.

“Sin duda que Muñoz es el cerebro de todo esto”, asegura el fiscal. Y agrega que el único de todo el grupo que accedió a prestar declaración fue Muñoz. “Él está convencido de que no ha hecho nada malo, convencido de que de que esto era un delito de ‘juante blanco’ y me lo dije: ‘Yo no he matado a nadie, no secuestro a nadie, no ando con pistola, me dedico a esto y lo aprendí en la cárcel y luego que salí de la cárcel, bueno, aprendí un poco más’.”

En los allanamientos efectuados en parcelas de Pelarco y viviendas de Talca y Curicó los detectives encontraron vehículos de alta gama, relojes y vestuario de las mejores marcas del mundo, cientos de perfumes exclusivos y más de 20 millones de pesos en billetes nacionales, además de dólares y euros, muchos de los cuales estaban ocultos entre las paredes.

La investigación, aún en curso, calcula que sólo en los bienes decomisados la banda tenía un patrimonio de 2 mil millones de pesos, lo que no incluye los gastos y viajes que solían darse sus miembros, principalmente las mujeres.

“Estamos calculando aún cuánto dinero se gastó esta gente, no nos ha llegado toda la información bancaria, pero en una tarjeta de crédito don Cindy Rojas había gastado entre 10 a 12 millones de pesos mensuales en una sola tarjeta... y nos faltan por tener productos bancarios en todos lados”, comenta el fiscal.

“Ellos vivían con todas las comodidades y hijos que se podían haber dado... todo ese dinero que se gastaban en darse esa vida era producto de las estafas”, agrega el subprefecto Fuentes, quien confidencia que indagan si estos delitos también los cometieron en Europa, pues les hallaron una base de datos española y chips y teléfonos especiales para comunicarse directamente con personas en ese país.

De acuerdo al cálculo de los investigadores, la banda arriega penas que podrían llegar a los nueve o diez años de cárcel, y mientras esperan el avance del proceso todos se encuentran en prisión. El fiscal admite que le resulta una paradoja que estén justamente en el lugar en que aprendieron a defraudar y no descarta que intenten atacar desde la cárcel nuevamente, dado que tienen todos sus bienes y cuentas congelados y lo más probable es que necesiten dinero para pagar sus defensas. Sin embargo, comenta que alberga la esperanza de que al menos no tendrán las facilidades para ingresar la tecnología para engañar como lo venían haciendo desde hace tanto tiempo. 5